

Representantes del Ayuntamiento, Delegación de Gobierno, Comunidad y los municipios de Rivas y Coslada firman un protocolo de actuación

Una solución para la Cañada Real

- A partir de ahora, las administraciones se reunirán casi a diario para decidir acuerdos sobre este asentamiento
- Los principales problemas son de carácter social, urbanístico y, sobre todo, de seguridad debido al tráfico de drogas, armas y cobre

Madrid, 09-abr-'12

Acabar con los problemas sociales, urbanísticos y de seguridad ciudadana de la Cañada Real Galiana es el objetivo del protocolo que esta mañana han firmado la delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Paz González; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes; el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad, Salvador Victoria, y los alcaldes de Coslada y Rivas Vaciamadrid, Raúl López y José Masa, respectivamente. A partir de ahora, las administraciones se reunirán casi a diario para poner en marcha acuerdos de cara a la solución definitiva de este asentamiento.

Según declaraciones de Paz González, el Ayuntamiento de Madrid tiene detectados ya los problemas que afectan a este asentamiento, que se extiende por los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas y que requieren una solución "global y social".

"El compromiso firmado hoy –ha explicado la delegada– es un paso hacia delante y una cuestión de sensibilidad hacia un problema enquistado en la sociedad madrileña desde hace muchos años, que necesita un tratamiento urgente y que el Ayuntamiento de Madrid tiene que resolver".

En la Cañada Real, un asentamiento con más de 50 años de vida, hay censadas 7.631 personas. Solo en la zona del municipio de Madrid viven alrededor de 6.000; otras 900 están censadas en Coslada, y el resto está asentado en el municipio de Rivas Vaciamadrid. El denominado Sector 6, que pertenece al término municipal de Madrid es el más conflictivo en cuanto a problemas sociales, urbanísticos y de seguridad ciudadana, ya que en él se registran actividades delictivas como tráfico de drogas, de armas e incluso de hilo de cobre. Pero no todos los ciudadanos que viven allí son delincuentes, y son muchos los vecinos que padecen las consecuencias de esas actividades ilícitas.

A partir de esta misma semana y hasta el próximo mes de agosto, habrá reuniones casi a diario, en las que además de las administraciones representadas en diferentes áreas y grupos de trabajo, también tomarán parte los vecinos censados y los que sin vivir en este asentamiento están

afectados por su proximidad.

En las reuniones se analizarán las necesidades de la zona y se elaborarán informes específicos con la participación de Asuntos Sociales, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Educación y Empleo y Transportes, tanto de los ayuntamientos afectados como de la Comunidad de Madrid. Abordarán asuntos sociales, urbanísticos, de seguridad, y también de saneamiento y alumbrado, abastecimiento de agua, gas, electricidad, movilidad o transporte./